

Lactalis invirtió en 2019 más de dos millones en sus fábricas de Zamora y Peñafiel

El Grupo de productos lácteos, que emplea a 175 personas en la región, destinó un millón en cada una de sus dos instalaciones

L.R. VALLADOLID
El Grupo Lactalis invirtió, a lo largo del año 2019, un total de dos millones de euros en las dos fábricas con las que cuenta en Castilla y León. Un millón fue destinado a la instalación de Peñafiel, en Valladolid, y Zamora recibió el otro millón. Estas inversiones se destinaron a mejorar la seguridad y automatización de los procesos.

Según figura en el Informe de Responsabilidad Corporativa del pasado año, estos dos millones de euros proceden de los 21 millones que el Grupo invirtió en sus ocho fábricas españolas.

El Grupo francés que llegó a España a principios de los años 80 se ha convertido en el mayor conglomerado lácteo de nuestro país. Una de sus mayores apuestas fueron los productos autóctonos de la zona. Así, la fábrica de Peñafiel, adquirida en 2006 y que el próximo año cumplirá 75 años, produce el queso Flor de Esgueva; mientras que a través de la adquisición de Zamora, en marzo de 2008, se introdujo en el mercado del queso fresco, un producto que anteriormente se integraba dentro de la marca Mama Luise, pero que desde 2011 se convirtió en El Ventero Fresco.

Desarrollo rural y medio ambiente forman parte de los compromisos del Grupo Lactalis. Según el consejero delegado del Grupo, Ignacio Elola, «Queremos seguir

aportando dinamismo a los entornos rurales, mejorando la sostenibilidad de la producción de la leche y el bienestar animal y, además, garantizar un uso eficiente y responsable de la energía y los recursos naturales».

Como consecuencia de las inversiones para lograr estos objetivos, el consumo de agua se redujo en un 1,8% en 2019. Además, en la actualidad, las ocho fábricas españolas trabajan con combustible limpio. En la misma línea se sitúan los compromisos para el próximo 2021, ya que gracias al acuerdo firmado con ENGIE España, el 50% de toda la electricidad que utiliza la compañía provendrá de fuentes no fósiles, es decir de origen renovable. Esta medida se estima que permitirá reducir en un 10% las emisiones de CO2 anuales, cifrándolo en casi 27.000 toneladas de dióxido de carbono al año emitidos a la atmósfera. El Grupo también afirma que a pesar de que el 100% de los envases son reciclables, se trabaja en su ecodiseño y en la incorporación de material reciclado en su fabricación.

«Los ganaderos son nuestros principales aliados en nuestra apuesta por la calidad y creemos en las relaciones a largo plazo con ellos», afirma Elola. Así otro de los principales puntos positivos de la inversión que realizan en las factorías tiene relación con el desarrollo

rural. Según fuentes del Grupo se cifra en que en 2019 se recogieron 1.028 millones de litros de leche de vaca, oveja y cabra. Una recogida que realizan siempre en un perímetro cercano a sus fábricas, en pequeñas poblaciones, para contribuir a evitar la despoblación poniendo el foco en las zonas rurales y tratando de reducir el impacto medioambiental en el transporte. «Colaboramos con unos 2.200 ganaderos y cooperativas y el 90% son a través de contratos anuales para aportarles estabilidad y flexibilidad para hacer crecer sus explotaciones», finaliza Elola.

LECHE ECOLÓGICA

Hace más de 20 años que Lactalis introdujo en el mercado la leche ecológica, el grupo es pionero en ello y actualmente es el principal impulsor y líder en esta categoría con la marca Puleva Eco. Además tiene el mayor número de granjas españolas, el 40%, con certificado de bienestar animal, un sello Welfare que ya certifica a 900 ganaderos. Y el objetivo para 2021 es conseguirlo en su totalidad.

Lactalis cuenta, entre otras, con la marca Lauki, que en septiembre de 2016 decidió cerrar su factoría de Valladolid, tras 60 años de operatividad, provocando además de despidos la recolocación de numerosos trabajadores en las factorías ubicadas en Peñafiel y Zamora.

Asaja augura pérdidas millonarias en el reajuste del precio del cereal

La organización agraria presagia un «reajuste al alza» en esta semilla y llama a los profesionales a «planificar correctamente» sus ventas

ICAL
La organización agraria Asaja considera que hay «indicios suficientes» para pensar que en Castilla y León se están pagando precios por el cereal «artificialmente bajos» y que los mercados obligarán a un «reajuste al alza» atendiendo a las cotizaciones europeas e internacionales del mercado de granos. Por ello, alertó de que la Comunidad podría dejar de ingresar 200 millones de euros con las «cotizaciones ruinosas» actuales de los agricultores de la región.

Según la agencia Ical, la organización informó que desde que se

iniciaron las tareas de recolección hay «presión» por parte de intermediarios que están «muy interesados en inflar las previsiones y asustar a los agricultores» que necesitan más liquidez, lo que ha llevado a cotizaciones «vergonzosas» que Asaja cifró hasta un 20 por ciento inferiores a lo habitual. Por ese motivo, la organización estimó que vender a los precios que se están ofreciendo actualmente supondría una diferencia de «unos 15.000 euros para una explotación cerealista media de unas 200 hectáreas».

De seguir con esta tendencia,

desde Asaja se lamentó que si los precios siguen «hundidos» por los acuerdos entre intermediarios, gran parte del cereal de Castilla y León «repunte» ya no estará en manos de los agricultores. Por ello, llamó a los profesionales del sector a «planificar correctamente» sus ventas sin provocar «un aluvión de ofertas» de los intermediarios para hacer acopio de grano «barato» y así aumentar sus márgenes comerciales. Hace unos días los mercados internacionales del cereal cotizaron al alza, y el precio de mercado en Francia, se está estabilizando para el trigo en 185 euros la tonelada.

La designación de Soraya Mayo en el Itacyl se vuelve contra Igea pese a asumirla Carnero

El PSOE lidera la carga contra el vicepresidente de la Junta, que esta vez recibe el respaldo de su grupo parlamentario: «No ha colocado a nadie»

A. G. ENCINAS

VALLADOLID. Soraya Mayo firmó su incorporación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) este martes y ayer por la mañana, mientras tomaba contacto con las 64 personas que dependen de su recién estrenada Subdirección de Investigación y Tecnología, se producía un movimiento político en torno a su designación que se convirtió en un arma contra el vicepresidente Francisco Igea. Concretamente, contra su afán «regenerador», proclamado incontables veces en la campaña electoral y que tenía precisamente al Itacyl y a otras 15 entidades públicas dependientes de la Junta en el foco de la formación naranja.

Para el PSOE y Unidas Podemos, no había dudas. La designación de Soraya Mayo, diputada de Ciudadanos en la exigua legislatura que nació el 28-A de 2019 y relegada en las del 10-N por el batacazo electoral, respondía, según los principales partidos de la oposición, al 'dedazo' nominador de Igea.

Soraya Mayo, preguntada por El Norte, se limitó a remitirse a la nota que poco después publicó la Junta de Castilla y León y a descartar rotundamente que su nombramiento tuviera que ver con Francisco Igea. «Paco no tiene nada que ver en esto», zanjó. Dentro de la convulsa situación

del partido naranja en Castilla y León, se dio una coincidencia entre las dos facciones. Primero, la que se incrusta en el Gobierno autonómico junto al PP, liderada por Igea, desde la que se insistió en que «Igea no ha colocado a nadie» y que «esto no tiene nada que ver con el acuerdo de Gobierno». De hecho en la Consejería de Agricultura solo se incluye por parte de Ciudadanos, explicaron, «la designación de la Dirección General de Cadena Alimentaria, que ocupa Gema Marcos».

La otra parte de la formación naranja, la mayoritaria en las Cortes de Castilla y León, envió un comunicado en la misma línea. «La formación no ha mediado ni intervenido en la incorporación de Soraya Mayo al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. La formación liberal asegura que se trata de un nombramiento realizado por el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero. Y que será este quien deba de dar las explicaciones oportunas del nuevo fichaje».

Y las dio. Principalmente porque su propio partido incidió en la misma línea: no hay rastro de Igea en el nombramiento de Mayo, sino que es una decisión de «la Consejería de Agricultura y Ganadería», enfatizó Jesús Julio Carnero. El consejero señaló a El Norte que su perfil «para la labor de relación público-privada que se necesita» es el idóneo, y defendió que ya cumplía con esa tarea desde su antiguo puesto en la presidencia de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos en Castilla y León). Mayo se presentó a las elecciones



Jesús Julio Carnero y Soraya Mayo, tras firmar un acuerdo en 2015. ICAL

por Ciudadanos, pero lo hizo como independiente, puesto que no es afiliado al partido naranja. De hecho, en 2011, Ramiro Ruiz Medrano y Jesús Julio Carnero, entonces presidente y secretario provincial del PP, respectivamente, la convencieron para presentarse a las Cortes por Valladolid por los populares. Resultó que Mayo, periodista de formación, no estaba empadronada por entonces en Castilla y León, sino en Madrid, y eso frustró la operación.

«Agencia de colocación»

Las explicaciones no debieron convencer ni al PSOE ni a Unidas Podemos, que se lanzaron en tromba sobre Igea. Primero fue Ana Sánchez, secretaria de Organización: «Se le olvidó por el camino la regeneración y mientras dejan por el camino a 70.000 trabajadores desprotegidos tras anunciar que no pagarán el complemento autonómico de los ERTE, a los diez diputados que nuestros vecinos no quisieron en las urnas los van colocando a todos en un silloncito calentito. Al de Zamora, al Serla; a la señora Mayo, al Itacyl, al instituto para el que el señor Igea pedía una auditoría hace unos meses para

«Quienes propugnaron un cambio basado en la regeneración, quienes decían que había que eliminar todos los chiringuitos en la administración paralela, no solo votan en contra en las Cortes cuando llevamos las iniciativas desde el PSOE sino que ahora utilizan los chiringuitos para colocar a los suyos. Ahora utilizan el Itacyl, uno de los focos de corrupción mayor que ha habido en esta comunidad autónoma en los últimos años, para colocar a una de las damnificadas del varapalo electoral de Ciudadanos en esta comunidad autónoma», recaló Tudanca.

Y lo mismo hizo Pablo Fernández (UP). «Ciudadanos hizo bandera de la regeneración de la supresión de la administración B y de los puestos de libre designación, pero se ha convertido en una suerte de agencia de colocación», manifestó a Ical.

Organismo en revisión

El Itacyl es una de las 16 entidades que se están revisando como resultado del pacto de Gobierno entre PP y Cs. Fuentes populares explican que se ha concluido la primera fase, la de análisis de situación de esos organismos, un análisis que se está haciendo, aseguran, con criterios técnicos. La Junta redujo entre 2011 y 2017 las 32 entidades y fundaciones que cobijaba a 17. Ciudadanos criticó lo que consideraba un derroche innecesario en muchos casos y ahora, aseguran desde el PP, se intentará encontrar el modo «de hacerlas más eficientes», aunque no se han planteado, de momento, «medidas concretas» para ninguna de ellas.

En el Instituto Agrario trabajan 181 personas y hay cuatro subdirecciones con una retribución anual bruta de 58.988 euros para cada una de ellas. En la Subdirección de Investigación y Tecnología se encuadran cuatro áreas, Investigación Agrícola, Investigación Ganadera, Innovación y Optimización de Procesos y Calidad y Promoción Alimentaria. El puesto de Mayo lo ocupaba antes, explicó la Junta, Pablo Gómez. Este procedía de Intras y tras más de cuatro años en el puesto tenía que elegir entre volver a su empleo anterior o perder la plaza. Optó por dejarlo y eso abrió la puerta a Mayo.

LAS FRASES

Luis Tudanca

PSOE

«Utilizan al Itacyl, uno de los mayores focos de corrupción de la región, para colocar a una de las damnificadas del 10N»

Pablo Fernández

Unidas Podemos

«Ciudadanos hizo bandera de la regeneración, pero se ha convertido en una agencia de colocación»

'acabar con ese chiringuito'.

Después golpeó Luis Tudanca, líder socialista, al que se le escapó esta frase que encierra muchos matices: «En lo que se refiere a Cs y PP no tengo ya mucha esperanza en su conversión». Cabe entender que se refiere al Ciudadanos que gobierna y que vive enfrentado al Ciudadanos parlamentario, cuyo desempeño a partir de ahora puede ser una grieta para la cuña socialista.

Ciudadanos coloca a dedo en el 'chiringuito' de Itacyl a la ex diputada Soraya Mayo

La dirección de la formación naranja se 'lava las manos' y el consejero agrícola, Carnero, defiende la decisión

RODRIGO DE LA HERA VALLADOLID
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) era uno de los 'chiringuitos' que Ciudadanos se comprometió a erradicar cuando hace un año llegaron muy ufanos al gobierno con unas ansias regeneradoras que no cabían en la Comunidad. Un año le ha valido al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, para dar un empleo dotado con unos 60.000 euros al año a la que fuera una efímera diputada por Valladolid entre mayo y noviembre del pasado año, Soraya Mayo.

Por sorpresa, Mayo, que ahora no tenía actividad conocida tras quedarse fuera del Congreso en las últimas elecciones, ha aparecido en el Itacyl, pese a que no tiene conocimientos de las áreas que maneja este organismo adscrito a Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que dirige el popular Jesús Julio Carnero. Nadie entiende en el PP y en el ejecutivo como Carnero se ha prestado a colocar a dedo a una de las descolocadas de Igea. La noticia corrió como la pólvora en los mentideros políticos.

La formación naranja, desde su dirección regional, enfrentada abiertamente con Igea, se desmarcó de la polémica contratación de su ex diputada, asegurando que se trata de un nombramiento realizado por «el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero, y será este quien deba dar las explicaciones oportunas del nuevo fichaje». En el mismo comunicado la dirección regional de Ciudadanos asegura que avanza en su compromiso de racionalizar la llamada «administración paralela», entre la que se encontraba el Itacyl, donde ahora se ha colocado a dedo a una ex diputada de Ciudadanos, que cuando perdió el acta de diputada aseguró que dejaba la política.

Sin embargo, siguió apoyando abiertamente a Igea, por ejemplo, en las primarias. Y ahora encuentra su recompensa. Ciudadanos Castilla y León quiere sacudirse el escándalo de encima y en ese mismo comunicado asegura, a través de su secretario de Acción Institucional y portavoz en Cortes, David Castaño, que «no ha mediado ni intervenido en la incorporación de Soraya Mayo al Itacyl». Más claro, agua, de cómo bajan las aguas en el río revuelto de Ciudadanos con dos sectores abiertamente enfrentados: el parlamentario de Luis Fuentes y el gubernamental de Francisco Igea. Cada uno a lo suyo, y a los suyos.

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, salió en defensa de Mayo justificando su nombramiento con el «aval» que suponen los 16 años que estuvo al frente de ATA. «Soraya Mayo es un gran aval para el Itacyl y para el futuro de la investigación agraria en la Comunidad» subrayó el popular. A pesar de su graduado en periodismo, Carnero parece considerar a Mayo idónea para el puesto.



Francisco Igea junto a Soraya Mayo, celebran los resultados de las pasadas elecciones generales de la Comunidad. ICAI

Sin embargo, este caso contraviene todo lo que lleva Igea y su séquito predicando y pregonando sobre la regeneración política, aunque lo más escandaloso es que se haga en el Itacyl, órgano que Ciudadanos prometió suprimir por

considerarlo «un chiringuito» dedicado a las maniobras políticas. Ante este hecho, el secretario autonómico de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, calificó de «escandaloso» el nombramiento, definiéndolo como una «administración paralela como un templo» que la formación naranja está engordando. «Ante nuestra sorpresa, Ciudadanos se ha dedicado a colocar a dedo a todos los miembros de su formación», ironizó Fernández. En este sentido, también tildó a Ciudadanos de convertir la Junta y la administra-

ción paralela en una «suerte de agencia de colocación», ya que «dedazo tras dedazo» se han colocado a los integrantes del partido que se iban quedando sin un puesto.

Para Fernández, se trata del «ejemplo más palmario y sangrante» de la «degeneración» política en la que ha caído Ciudadanos en Castilla y León. «Vinieron a regenerar y están degenerando nuestras instituciones hasta límites insospechados», sentenció, preguntándose por el criterio que ha utilizado Igea para el «dedazo» de Mayo en el Itacyl.

«No les ha importado, porque todos los que se quedaron fuera de las instituciones por voluntad popular, ahora les están colocando a dedo en las instituciones, esta es la regeneración y el cambio», apostilló el socialista.

«No les ha importado, porque todos los que se quedaron fuera de las instituciones por voluntad popular, ahora les están colocando a dedo en las instituciones, esta es la regeneración y el cambio», apostilló el socialista.

Tudanca tilda al ente de ser el «mayor foco de corrupción» de la Comunidad

RODRIGO DE LA HERA VALLADOLID
El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha acusado a Ciudadanos de «colocar a dedo» a los «damnificados del varapalo electoral» tras las últimas elecciones generales. Considerando que «no tienen vergüenza ni remedio», hizo hincapié en las promesas «basadas en la regeneración» del colectivo naranja al llegar el Ejecutivo de Castilla y León.

Tudanca echó la vista atrás para reseñar los propósitos de Ciudadanos de «eliminar todos los 'chiringuitos' y la administración paralela», pero les acusó de que ahora «votan en contra de ello» en las propuestas del PSOE en las Cortes. El socialista arremetió también contra el Itacyl, tildándolo de «uno de los focos de mayor corrupción que ha habido en la Comunidad en los últimos años», utilizándolo para «colocar a una de las damnificadas del varapalo electoral que Ciudadanos se llevó en Castilla y León, pasando de diez diputados a cero».

Asaja denuncia los «tejemanejes» de Igea por acomodar a los suyos «metiendo poco ruido»

RODRIGO DE LA HERA VALLADOLID
La organización agraria Asaja también quiso denunciar los «tejemanejes» de Ciudadanos en el Itacyl, que «politizan» la estructura administrativa en este órgano, una técnica que según la organización agraria «no casa bien con el propósito del que hace bandera Ciudadanos de venir a regenerar la vida política». Después de que la formación naranja haya colocado a Soraya Mayo en el equipo de dirección del centro, la organiza-

ción agraria lamentó que Ciudadanos haya visto ahora en el Itacyl «el lugar idóneo para colocar a los suyos metiendo poco ruido» cuando hace apenas unos meses promovió una auditoría para determinar la viabilidad del centro.

A juicio de Asaja, se trata de «un error» que la Junta haya buscado «acomodo» en este órgano «para una persona que perdió su acta de diputada por Valladolid en las últimas elecciones», y recordó

que fue el vicepresidente de la Junta quien instó a una auditoría de servicios para comprobar la labor del Itacyl. «Al parecer, lo que quería el vicepresidente Igea era conocer cuántos de sus amigos o militantes del partido podía colocar sin pasar por el debido concurso de méritos u oposición que se exige para cualquier funcionario público», lamentó la organización a través de un comunicado.

Mientras Asaja ve el Instituto Tecnológico Agrario como «un

ente de la administración con capacidad para dar soluciones a los problemas de la agricultura y la ganadería, de forma más ágil que la propia administración», otros lo ven como «el lugar idóneo para colocar a los suyos metiendo poco ruido». «La táctica es siempre la misma: se coloca a la persona en un puesto de libre designación, y después se le hace personal fijo ganando más dinero que los funcionarios que han sacado su oposición», denunció Asaja.

PSOE y Podemos cargan contra el nombramiento de Mayo en Itacyl

► Junta y Cs defienden la designación de la exdiputada «naranja» y expresidenta de ATA

ABC
VALLADOLID

La designación por parte de la Consejería de Agricultura de la exdiputada de Ciudadanos por Valladolid, Soraya Mayo, como subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León enfreizó ayer a las dos formaciones de izquierdas en Castilla y León, que no dudaron en asegurar que el cargo de alta dirección que ocupará la también expresidenta de la Asociación de Autónomos de Castilla y León era una decisión «a dedo» de la formación con la que «colocar a dedo» a sus candidatos que perdieron su acta de diputado en las últimas elecciones generales —después de que en el caso de Mayo si la consiguiera en los comicios de abril de ese mismo año—.

Pese al ataque contra Ciudadanos, fue el consejero de Agricultura y Ganadería, el popular Jesús Julio Carnero, el que explicó. El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, el que aseguró que el nombramiento está «avalada» por sus 16 años al frente de la ATA, lo que le ha permitido tener «relación directa» con organizaciones, entidades y asociaciones públicas y privadas. «Soraya Mayo es un gran aval para el Itacyl y para el futuro de la investigación agraria en la Comunidad», defendió el consejero. En esta línea, defendió que su tarea, que dependerá del director del Itacyl, Jorge Llorente, será de la de «implementar distintas actuaciones» sobre la red de centros y unidades tecnológicas, lo que conlleva la relación con más de 250 socios entidades del sector empresarial, asociaciones públicas y privadas, universidades, empresas agroalimentarias y empresas tecnológicas.

«No tienen vergüenza»

Mientras, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acusaba directamente a Ciudadanos de utilizar los «chiringuitos» de la administración para colocar a los suyos. Por ello, opinó que «ésta es la regeneración y el cambio del PP y de Cs en Castilla y León» y sostuvo que, tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente «no tienen vergüenza, ni remedio». Tudanca argumentó que se ha pasado de quienes se presentaron a las elecciones «y decían que había que eliminar todos los chiringuitos y la administración paralela, no solo voten en contra de ellos en las Cortes, si no que los utilizan para colocar a sus dirigentes».

En una línea similar, el líder de Podemos Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, Pablo Fernández, acusó a Cs de «degenerar» la vida pública y convertirse en una «agencia de colocación» para sus cargos que no fueron elegidos en las últimas elecciones en distintos puestos en la administración B, que querían eliminar. «Es escandaloso, Ciudadanos se mostró en contra de los chiringuitos, como el Itacyl», valoró Fernández. «Ciudadanos hizo bandera de la regeneración y de la supresión de los puestos de libre designación, pero se ha convertido en una suerte de agencia de colocación», censuró Fernández que añadió que es «el ejemplo más palmario de la degeneración política

hasta límites insospechados de quienes venían a regenerar».

Mientras, la formación de Ciudadanos Castilla y León mantuvo que no ha mediado ni intervenido en la incorporación de Soraya Mayo, exdiputada del partido naranja al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La formación liberal asegura que se trata de un nombramiento realizado por el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero.

Asimismo, Cs certifica que avanza en su compromiso de racionalizar la llamada «administración paralela», organismos de financiación pública sujetos al derecho privado. En este sentido, recuerda la puesta en mar-

cha de la Comisión Paritaria para la Racionalización de los Entes Públicos de la Comunidad, fruto del Acuerdo de Gobierno suscrito entre Cs y el PP, concretamente en su punto tercero, y que tiene como objetivo determinar la extinción o la transformación de 16 entidades, entre ellos el Itacyl, informa Ical.

Por último, la organización agraria Asaja denunció los «tejemanejes» de Cs en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) que «politizan» la estructura administrativa en este órgano, una técnica que según la organización agraria «no casa bien con el propósito del que hace bandera Cs de venir a regenerar la vida política». «Al parecer, lo que quería el vicepresidente Igea era conocer cuántos de sus amigos o militantes del partido podía colocar sin pasar por el debido concurso de méritos u oposición que se exige para cualquier funcionario público», lamentó la organización a través de un comunicado.



Igea y Mayo celebran el éxito de Ciudadanos en las generales del 28 de abril de 2019

ICAL

Culpa a Mañueco de «poner en jaque los consensos»

El PSCL asegura que el Diálogo Social está «roto» en la Comunidad

ABC SEGOVIA

La secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, aseguró ayer que «es un hecho objetivo a día de hoy que el Diálogo Social en Castilla y León está roto» porque, en su opinión, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha puesto «en jaque» todos los consensos. Sánchez se manifestó en estos términos durante una rueda de prensa en Segovia antes de reunirse con

el secretario de organización del PSOE en Segovia, José Antonio Mateo. La socialista señaló que «no hay un solo colectivo en esta comunidad autónoma, tan sólo un año después, que no esté indignado con Alfonso Fernández Mañueco», al que calificó como «el peor presidente de la historia de Castilla y León». Citó como ejemplo de ello a los sindicatos y la patronal, quie-

nes la semana pasada emitieron un comunicado conjunto en el que acusaban al presidente de «un grave incumplimiento» de los acuerdos firmados en el Dialogo Social al no haber consensuado las nuevas bases que regulan las ayudas a los ERTE. Sánchez insistió en que estos y otros colectivos como el Sindicato de Enfermería (Satsfe) o las organizaciones de profesionales agrarios están «hasta el mismísimo de la Junta». Acusó al presidente de permanecer «indolente, escondido, que no da la cara», mientras «se ponen en jaque todos los consensos sobre los que se construyó Castilla y León», informa Efe.



A. SÁNCHEZ

La Federación de Caza se querrela contra tres magistrados del TSJCyL

Les acusa de «posible prevaricación judicial» al prohibir la caza en la Comunidad

JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID
La Federación de Caza de Castilla y León y la Fundación Artemisan han presentado una querrela contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ). Ambas entidades consideran que los magistrados adoptaron algunas decisiones «sin fundamento jurídico» sólo con el objetivo de «perjudicar al sector cinegético».

La querrela se ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), a los que consideran responsables de un presunto delito de prevaricación judicial.

Para esta Federación y para Artemisan -y tal y como entendió el cuarto magistrado que discrepó de la decisión emitiendo un voto particular- la decisión de los jueces de no admitir el desistimiento a un recurso de reposición interpuesto por la letrada de la Comunidad «no tuvo sustento jurídico real, sino que se hizo con la finalidad última de poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la recién aprobada Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, que se habrían tomado decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de

perjudicar al sector cinegético».

Según explican la Federación de Caza de Castilla y León y la Fundación Artemisan en la querrela presentada, el rechazo al desistimiento de la letrada de la Comunidad no tiene soporte jurídico. Por eso, entienden que se produjo una «prevaricación judicial de naturaleza procesal manifestada directamente en los autos de inadmisión del desistimiento y por alcance, porque supondría un evidente exceso de jurisdicción, en el auto de 11 de noviembre de 2019».

Y es que el indicado auto, elevando la cuestión de inconstitucionalidad «constituye por sí solo un evidente exceso en el ejercicio de la jurisdicción en la medida en que el desistimiento previo constituía una causa impeditiva para dictarlo».

«Las decisiones jurisdiccionales de las que discrepamos arrollan el derecho procesal con una finalidad de anteponer su voluntad a la estricta aplicación de la norma procesal, constituyendo ello, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la esencia del delito de prevaricación judicial, que en este caso no solo resulta consumado sino, incluso, agotado», refleja la querrela.

El presidente de la Territorial de Caza, Santiago Asurmendi, asegura que la decisión se ha adoptado para defender los derechos de los cazadores y el sector cinegético. «No podemos tolerar ni consentir actitudes contrarias a la ley. Siempre han fallado en contra de las

disposiciones de la Junta. Es el hecho de la persistencia, resulta muy difícil que siempre se hagan las cosas mal. Esto ha sido la gota que desborda el vaso».

El motivo de este querrela tiene su origen en la decisión de los tres magistrados del TSJ contra la aprobada Ley de Caza 9/2019 de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio. «Esa decisión hizo muchísimo daño al suspender la caza en su totalidad. Es algo que no se había producido en España, fue un atropello a la caza», señaló a este diario el máximo responsable de la caza regional.

En su decisión, el TSJCyL aseguró ser consciente de los «daños» que puede traer consigo esta prohibición de la caza, a pesar de que prioriza la conservación de la fauna porque tiene «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección. Los daños para los intereses generales y de terceros están expuestos en términos genéricos y, desde luego, son de más fácil reparación, e incluso pueden ser evitados o corregidos por otras vías», sentenciaron tres de los cuatro jueces de la sala. Al hablar de «términos genéricos», los magistrados se refieren a que no se sabe «en cuánto van a aumentar las especies, ni cuándo y de qué manera», y, porque a veces se utilizan datos de otras Comunidades Autónomas o del Estado para justificar este argumento. Desde la Junta indicaron en

su momento que los daños de la prohibición de la caza serían más problemáticos: «el número de especies que podrían cazarse van a aumentar y producir otros perjuicios y daños tanto para otras especies animales (incluso protegidas) que compiten en el mismo hábitat, como para la agricultura, ganadería e incluso para la salud humana, pudiendo provocar un aumento de la siniestralidad viaria».

Iturmendi asegura que se cometió «una presunta prevaricación». «No nos gusta tomar esta decisión, le hemos dado muchas vueltas pero tenemos que defender el mundo de la caza y el mundo rural y se han cometido daños irreparables». En la querrela presentada queda reflejado que el cuarto magistrado de la sala discrepó de sus compañeros y emitió «un voto particular», un aspecto que llama la atención del máximo responsable de la Territorial. «En varias ocasiones ha discrepado, su voto está en contra de sus compañeros».

Tanto la Federación de Caza como Artemisan confían en que se escuchen sus protestas para el beneficio de los cazadores de la Comunidad y el sector cinegético en general. «Confiamos en que la querrela salga adelante, con ese objetivo la hemos presentado. Lo hacemos a través de un gabinete jurídico de Madrid muy importante. Nos hemos asesorado bien para tomar esta decisión, no nos vamos a amedrentar», concluye Iturmendi.



Varios inmigrantes temporeros en el interior de uno de los pabellones de Camp Elisis que se han habilitado en Llerda para la entrega de comida y que pasen la noche. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

Temporeros atrapados en Llerda

● Señalados como foco del rebrote y sin poder trabajar, cientos de inmigrantes deambulan por la ciudad en espera de poder salir tras el confinamiento ● «En la tele decían que había mucho trabajo, pero llegas y nada. Me quiero ir de aquí»

TESTIGO DIRECTO

ANA MARÍA ORTIZ
LÉRIDA
ENTREVISTA ESPECIAL



Tiene un termo de café en el suelo, un tarro con el azúcar y una vieja silla de oficina, todo junto a un árbol a unos 50 metros de la entrada principal de uno de los pabellones del Camp Elisis que el Ayuntamiento de Llerda ha habilitado para dar cobijo a los temporeros que no tienen donde dormir. Dice que se llama Abdul y vende los cafés a 50 céntimos.

Abdul es originario de Marruecos, tiene 45 años y lleva 21 en Llerda. Ha trabajado en la construcción, en su currículum figura «un diploma de trenes y otro de cocinero» y hasta el 28 de junio recolectaba melocotones en la localidad de Soses. No sabe para qué empresa. «No conozco, en el contrato pone que el jefe se llama Pedro». Ese día, relata, llegaron a la explotación coches de Policía y ambulancias y le hicieron la prueba del coronavirus a todos, unos 90. Siete dieron positivo y el jefe les anunció que paraban. «Y ya no quiero trabajar. Tengo miedo del coronavirus».

La empresa debe de ser una de las 10 firmas hortofrutícolas de la comarca del Segrià en la que se han producido los que probablemente sean los brotes más preocupantes de los registrados en España. En total son 14 repuntes en este territorio que abarca la ciudad de Llerda y otras 37 localidades: 210.000 habitantes que tienen prohibido abandonar la comarca desde el pasado 4 de julio.

El foco del por qué del contagio está puesto en los temporeros, en los 30.000-35.000 inmigrantes que acuden cada año al Segrià a la campaña de la fruta. Muchos no encuentran trabajo y deambulan por las calles.

Abdul, como veterano en Llerda, ha apadrinado a un puñado de estos compatriotas marroquíes novatos, llegados siguiendo el canto de sirena de que faltaba mano de obra y que llevan semanas vagando, sin ingresos y ahora sin poder regresar a sus ciudades de origen. Entre ellos está Anas. Tiene 19 años y, según cuenta con la ayuda de la traducción de su mentor, sus padres lo enviaron desde Marruecos a estudiar en Granada hace 8 meses. Se presentará a la Selectividad en septiembre, pero no queda claro si no lo ha hecho en

esta convocatoria de julio por falta de preparación o porque ha priorizado trabajar en la campaña de la fruta. Llegó a Llerda hace 6 días y ni siquiera ha visto un melocotono.

Son las 20.30 horas del lunes 7 de julio y en los pabellones de Camp Elisis hay bastante movimiento en la entrada. A las 20.00 horas ha comenzado el reparto de la cena –un bocadillo– y la recepción de quienes quieren quedarse a dormir en las hamacas negras plegables, como de playa, dispuestas sobre el suelo. Esta noche pernoctarán 200 personas. Se les

permite también usar las duchas, guardar sus pertenencias en consignas o lavar la ropa. Muchas de sus prendas están tendidas para secar sobre la valla que rodea el edificio. A la mañana siguiente, tras el desayuno –bocadillo de pavo o queso–, sobre las 09.00 horas, deberán abandonar el recinto. Y así todos los días.

Por los aledaños merodeaba a la caída de la tarde Mohamed, de 23 años. Tenía plaza en el pabellón, pero hace una semana se peleó dentro con otro marroquí y lo expulsaron. Lo dejan asearse y cambiarse de ro-

pa pero no pasar la noche, por lo que desde entonces duerme en la calle. Cuenta que vive en Italia con sus padres desde los 10 años pero que el estallido de la pandemia le pilló de visita en Marruecos y como Italia cerró antes las fronteras entró en España por Algeciras en los prolegómenos de que se decretara aquí el estado de alarma. Trabajó dos meses en los frutales en Murcia, luego un mes cogiendo melones en Almería y hace dos semanas llegó a Llerda con altas expectativas. Ya da por hecho que no va a encontrar nada.

Del bolsillo saca el resguardo de la denuncia que ha presentado ante los Mossos y explica que hace unas noches le robaron el móvil y los 150 euros que le quedaban después de enviar casi todo lo que había ganado antes –unos 2.000 euros– a sus tíos en Marruecos. Con la mano izquierda sujeta una bolsa de plástico con sus pertenencias: una prenda de ropa y la botella de vino que se beberá esta noche «para *dimenticare* [olvidar]», dice en italiano. Su plan para vadear la situación es claro: salir de Llerda lo antes posible. «Subir a un tren sin billete, en cuanto abran [el confinamiento]. Por multa no tengo

LAS MASCARILLAS, OBLIGATORIAS EN CATALUÑA

Anuncio de Torra. El 'president' anunció ayer que la mascarilla será obligatoria en Cataluña, incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. La medida entra hoy mismo en vigor.

Multas de 100 euros. El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 100 euros. Siguen vigentes las excepciones que eximen su uso cuando sea incompatible (hacer deporte o bañarse).

Illa: «No me parece mal». El ministro de Sanidad, Salvador Illa, valoró positivamente la noticia: «No me parece mal. Si en Cataluña quieren dar un paso más, no tengo nada que decir», dijo.

EL MUNDO (9/07/2020)

problema, mi familia me paga», dice.

Explican vecinos e instituciones que no perciben una mayor afluencia de temporeros en esta campaña, pero lo cierto es que casi la totalidad de los inmigrantes a los que preguntamos aseguran que nunca habían venido antes y que lo han hecho tras leer o escuchar que los empresarios fruteros necesitaban mano de obra.

Es el caso de llamémosle S., porque no quiere revelar su nombre. Nacido en Senegal, tiene 45 años, lleva 18 de ellos en España y reside en Leganés (Madrid). Se dispone a entrar en el pabellón impecablemente vestido: polo azul cielo de El Gan-

Hay quien, por miedo, prefiere dormir en la calle: en el pabellón temen contagiarse

so y pantalones chinos de color marrón. «En la tele decían que había mucho trabajo y no hay nada», se lamenta tras 28 días de búsqueda en los que sólo ha trabajado tres.

A las 23.00 horas, el silbato del guardia de seguridad que vigila el recinto anunciará que el pabellón se cierra. Seis personas se quedan voluntariamente fuera durmiendo en un lateral del enorme parking que rodea el edificio. Sus argumentos: no hay distancia y temo contagiarme.

Al preguntar cómo se alimentan sin ingresos, muchos mencionan la entrega de comida que Cáritas hace todas las mañanas a las 10.00. Cuando el martes llegamos al punto indicado, en realidad se trata de un centro de la Fundación Arrels San Ignasi. A esa hora hay una treintena de africanos esperando y una hora después serán otros 20. Hoy el tercero en la cola es Anas, el chico de Granada de la selectividad. Ha llegado en la bicicleta que Abdul le presta. Saldrá con una bolsa llena. Una entrega prototipo incluye algo de bollería, un zumo, una lata de sardinas y una fruta. Se ofrece además leche a quien la quiera, yogur y dátiles.

En un banco esperando que comience el reparto hay tres veinteañeros senegaleses. El de la izquierda llegó hace dos meses desde Granada, donde ha trabajado en invernaderos, y su hoja laboral en Lérida está en blanco. El del medio de La Coruña, donde era pescador. El relato del tercero, de Bilbao, es idéntico. «Hay mucho sitio para apuntarte para trabajar pero no te llaman de nada», se queja el pescador.

Por el día, en pequeños grupos, se les ve por las calles de Lérida mientras la ciudad sigue a un ritmo aparentemente normal pese a los brotes. Ya por la tarde, en la plaza LHort de Santa Teresa, en las traseras de la catedral, unos 20 africanos matan el tiempo. Algunos usan la fuente para refrescarse. Tumbado en el suelo a la sombra con dos colegas está el senegalés D. A., de 24 años. Ha pasado la noche en el pabellón. Lleva un mes en la ciudad. «Llegas y no hay trabajo. Me quiero ir de aquí», dice.

Reino Unido sale al rescate de su economía con bajada de impuestos

El Gobierno británico recorta el IVA para la hostelería y suprime el impuesto a la vivienda

CARLOS FRESNEDA LONDRES
CORRESPONSAL

El Gobierno británico presentó ayer un nuevo conjunto de medidas para reactivar los sectores más castigados de la economía, con una bajada de impuestos y un plan de empleo juvenil. El secretario del Tesoro, Rishi Sunak, anunció en el Parlamento la rebaja temporal del IVA (del 20% al 5%) para el sector de la hostelería, la supresión hasta el mes de marzo del impuesto de Transmisiones para la venta de casas (por valor inferior a los 556.000 euros) y el destino de 2.225 millones de euros a un programa de apoyo a la creación de empleo para los menores de 24 años.

El anuncio se produce a los pocos días de que el *premier*, Boris Johnson, anticipara su versión del *new deal*, con una inversión inicial de 5.560 millones de euros en infraestructuras, hospitales y escuelas. El Gobierno británico decidió aprobar también un paquete de 2.250 millones de euros de fomento del empleo verde y dar un apoyo extra a las empresas que garanticen la contratación a los trabajadores que se han acogido al programa de retención de empleo (con un gasto adicional previsto de 10.000 millones de euros hasta el mes de enero).

«No permitiremos que sea esta crisis la que nos defina, sino que será nuestra respuesta la que marque la pauta», declaró Sunak en su discurso, consagrado íntegramente a la respuesta ante la crisis causada por la pandemia, que ha dado ya un mordisco del 20% a la economía británica y puede provocar un caída de hasta el 14% del PIB, según estimaciones del Banco de Inglaterra.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado que el desempleo podría dispararse alarmantemente en Reino Unido: del mínimo histórico del 3,9% registrado antes del confinamiento hasta el 15%.



El secretario del Tesoro británico, Rishi Sunak, camino de la Cámara de los Comunes, ayer, 9/07.

«Lo que parece faltar es un nuevo presupuesto consagrado a la defensa del empleo», replicó la diputada laborista Anneliese Dodds, portavoz de la oposición para asuntos económicos, que criticó como insuficientes las medidas. «Este debería haber sido el día en que millones de británicos preocupados por sus puestos de trabajo deberían haber sentido que les quitaban un peso de los hombros. [...] Y sin embargo hemos comprobado que muchas de las grandes decisiones se han pospuesto».

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Johnson fueron sin embargo recibidas positivamente por los sindicatos. Frances O'Grady, secretaria general del sindicato TUC, dio la bienvenida al plan de empleo

juvenil del Gobierno como «un buen primer paso inicial».

La patronal dio también su apoyo a las iniciativas anunciadas. «Dar prioridad al empleo es lo que se debe hacer en estos momentos, y los bonos para retener los puestos de trabajo serán de gran ayuda», aseguró Carolyn Fairbairn, directora general de la Confederación de la Industria Británica (CBI). «El secretario del Tesoro debe sin embargo encontrar un equilibrio entre las inversiones a largo plazo, la recuperación sostenible y los retos urgentes a los que se enfrentan las compañías».

El portavoz liberal-demócrata Ed Davey criticó, sin embargo, el peso escaso de las medidas de recuperación verde (2.250 millones en sub-

versiones para eficiencia energética en las casas) en contraste con «las inversiones anunciadas por Francia o Alemania», con planes concretos de acción ante el cambio climático.

► **EMPLEO JUVENIL.** El Gobierno ha dado la máxima prioridad al programa de impulso al empleo entre los 16 y los 24 años, del que podrían beneficiarse 350.000 jóvenes en los próximos meses. El Estado asumirá el salario mínimo en los nuevos contratos, concederá becas y subvencionará cursos de aprendizaje. «Los jóvenes siempre pagan el precio de las crisis, pero esta vez corren un riesgo especial porque trabajan en los sectores más golpeados por la pandemia», recaló Sunak. «Sabemos tam-

bién que el desempleo juvenil tiene un impacto a largo plazo en los salarios, y no queremos que algo así suceda con esta generación».

► **IMPUESTO DE TRANSMISIONES.** El Secretario del Tesoro puso también el énfasis en la necesidad de estimular el alicaído mercado inmobiliario, con la supresión durante nueve meses del impuesto de Transmisiones a la venta de casas por debajo del medio millón de libras. Se estima que la medida puede suponer un ahorro de hasta unos 17.000 euros en la venta de un hogar. Por encima de los 550.000 euros se pagará un impuesto del 5% y subirá al 10% y al 12% en las casas de más valor. La medida ha sido bien acogida sobre todo en Londres, tras el parón sufrido.

► **REBAJA DEL IVA EN HOSTELERÍA.** El otro anuncio esperado y confirmado ha sido el de la rebaja temporal del 20% al 5% del IVA al sector turístico y hostelero. Los pubs, restaurantes y hoteles reabrieron el 4 de julio, pero con graves problemas para recuperar clientela. Sunak estima que la medida le costará 4.500 millones de euros a las arcas públicas. Como complemento, el Estado sufragará también descuentos de hasta el 50% por cabeza por comer fuera, en un programa especial bautizado *Eat Out to Help Out*, que estará en vigor durante el mes de agosto.

► **LAS ARTES.** El Gobierno anunció esta semana 1.700 millones de euros para un programa de ayuda a las artes, con especial énfasis en teatros, galerías y museos. «Vamos a proteger no solo a las joyas de la Corona, como el Royal Albert Hall, sino a muchas instituciones locales», anticipó el secretario de Cultura, Oliver Dowden. Los empresarios del sector han criticado el plan como «insuficiente» y han urgido al Gobierno a que facilite un calendario de apertura de espectáculos en directo.

► **'NEW DEAL.'** Boris Johnson adelantó hace una semana un *new deal* al estilo Roosevelt, aunque el alcance de su programa fue al final bastante menos ambicioso de lo anticipado. Johnson anunció también el mayor cambio en medio siglo de planeamiento urbano para impulsar la construcción de viviendas.



CON DINERO DE TODOS

SANTIAGO LAGO PEÑAS

Déficit y subida de impuestos

Asistimos a un debate sobre política fiscal en el que se confunden magnitudes y planes. Vayamos por partes.

Comencemos con los hechos. Primero, España es uno de los países de la Unión Europea con un mayor déficit estructural; esto es, dejando al margen el efecto de la

coyuntura. En 2019 cerramos con un desequilibrio estructural en el entorno del 3%, según la Comisión Europea; alrededor de 35.000 millones de euros. Segundo, ese déficit tan abultado, junto a una deuda que supera ya el 100% del PIB, ata las manos del Gobierno central a la hora de afrontar la crisis: somos uno de los países en la Unión Europea menos activos fiscalmente en estos momentos, a años luz de Alemania. Tercero, la recaudación tributaria española es estructuralmente menor a los países de nuestro entorno, a pesar de contar con unos tipos impositivos similares (salvo en lo que atañe a los impuestos sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos). La multitud de beneficios fiscales que pueblan la normativa de todos los tributos y el fraude son los principales factores explicativos.

Sigamos con los pronósticos. El déficit público en 2020 se va a disparar. Según mis propios cálculos presentados en la revista *Cuadernos de Información Económica* de FUNCAS, con una caída del PIB en el entorno del 9% como la que prevé el Gobierno, el déficit será, al menos, del 11,5%. Y la ratio de deuda aumentará sustancialmente más porque, al caer el PIB, se reduce el denominador y aumenta el cociente. Nos acercaremos al 120% al final de 2020.

¿Qué hacer? Lo primero, no agobiarse. No hay alternativa al incremento del déficit y la deuda este año. Ahora es lo que toca. Lo segundo, asumir que necesitamos una estrategia de consolidación fiscal que equilibre las cuentas públicas y elimine el déficit estructural a partir de 2021. En

2020 no es el momento de subir impuestos.

Y si hablamos de aumentar impuestos, hay que tener en cuenta que los planes de subidas fiscales que el Gobierno maneja desde el proyecto de presupuestos para 2019 van a ser claramente insuficientes para equilibrar cuentas, si no se producen importantes recortes de gasto incompatibles con el programa y ambición del Gobierno actual. Con el impuesto a las grandes fortunas o la *tasa Google* no llega, ni de lejos. La estrategia debe ser mucho más ambiciosa e, inevitablemente, acabará generando que todos paguemos más impuestos, en mayor o menor grado. Sin duda, la ayuda europea puede facilitar el camino de la recuperación y hacerla menos dolorosa. Pero nuestro edificio tributario nos toca arreglarlo a nosotros.

Hasta 41.000 euros de multa para las empresas que incumplan las medidas de protección por la covid-19

Los inspectores de trabajo podrán acudir a los centros para comprobar que se respeta la distancia de 1,5 metros entre los empleados

LUCÍA PALACIOS

MADRID. En plena desescalada, uno de los grandes focos de contagio de la covid-19 puede estar en las empresas, muchas de las cuales ya han iniciado el retorno gradual de sus trabajadores a las oficinas. Es por esto que el Gobierno quiere poner especial atención en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral para prevenir los contagios. Impuestas hace un mes, y ha habilitado a la Inspección de Trabajo

de manera «extraordinaria» y «limitada en el tiempo» para imponer sanciones de entre 2.046 y 40.985 euros en caso de que no se respete la normativa vigente, según recoge el Real Decreto publicado ayer en el BOE.

Si hasta ahora esto era competencia de las autoridades sanitarias, los inspectores de Trabajo asumen el mando y, junto a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas, serán los encargados de «vigilar y requerir, y en su caso extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública», según consta en el texto que modifica el decreto aprobado el pasado 9 de junio.

Más concretamente, los inspectores supervisarán que las em-

LAS NORMAS QUE HAY QUE CUMPLIR

► **Limpieza del centro.** La empresa deberá adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas.

► **Lavado de manos.** Se deberá proporcionar a los trabajadores agua y jabón o geles hidroalcohólicos para lavarse las manos.

► **Distancia de seguridad.** Se garantizará una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.

► **Turnos.** Se evitará la coincidencia masiva de trabajadores en los centros durante las horas de mayor afluencia.

presas cumplen con la obligación de adoptar medidas de desinfección, limpieza y ventilación adecuada de los centros de trabajo; proporcionar agua y jabón o geles hidroalcohólicos a sus empleados para el lavado de manos; garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada trabajador, tanto en su puesto como en

las zonas comunes, o, cuando no sea posible, proporcionarles los equipos de protección (EPI) adecuados para el nivel de riesgo, y adaptar las condiciones de trabajo organizando turnos para evitar la coincidencia masiva de trabajadores durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. El Ejecutivo establece que el

incumplimiento de las obligaciones de estas medidas anti-covid se considerarán infracciones graves, que cuentan con sanciones que pueden alcanzar los 40.985 euros.

La cuantía de la multa dependerá de la cifra de negocio de la empresa pero fundamentalmente del grado de incumplimiento: a mayor número de trabajadores sin protección, mayor multa, explican desde la Inspección de Trabajo, que también avisa de que la sanción será más elevada si la compañía ya había recibido un requerimiento previo.

El Gobierno explica que esta medida «supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo mediante una acción inspectora adecuada a las necesidades de una respuesta ágil para controlar la pandemia y un marco jurídico inequívoco en la respuesta a los posibles incumplimientos constatados».

Y lo justifica en que se trata de «espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebotes de contagios habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, se han producido en los centros de trabajo».

Plantilla insuficiente

Un total de 965 inspectores y 85 subinspectores se encargarán de llevar a cabo estas labores de vigilancia en todas las empresas españolas, una plantilla mínima para todas las tareas que tienen encomendadas, según denunció a este periódico Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de trabajo, que pidió al Gobierno un «refuerzo urgente».

Ercoreca manifestó que si son ellos los que ahora tienen que realizar estas competencias que eran de sanidad, «se tienen que hacer con unas condiciones adecuadas, con una plantilla y con unos medios». «Ni hay plantilla, ni medios ni nada», se lamentó.

Una ley sobre el teletrabajo «errática» y «desequilibrada»

La futura ley que regulará el teletrabajo sigue su tramitación con paso firme pero con una exacerbada crítica por parte de los empresarios, que tildan el anteproyecto que ha publicado el Gobierno como «errático», «apartado de la realidad» y «desequilibrado». Así lo manifestó la patronal en un comunicado enviado a los medios tras mantener la primera reunión sobre este asunto con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. CEOE y Cepyme se oponen con firmeza a un texto que ha sido «concebido al margen del diálogo social», una crítica que también comparten las organizaciones sindicales. «Lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo, podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación», sostienen.



Funcionarios trabajando con la mascarillas puestas en el Ayuntamiento de Granada. ALFREDO AGUILAR

Luis de Guindos se muestra optimista ante los datos que le llegan sobre la recuperación

J. M. CAMARERO

MADRID. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha anticipado que a pesar de la dureza de la crisis causada por el nuevo coronavirus, los datos más recientes apuntan a que se puede ser algo más optimistas con respecto de la situación en los próximos tri-

mestres. «Los datos recientes que hemos recibido sugieren que podemos ser un poco más optimistas sobre la caída del crecimiento en el segundo trimestre y la expansión en el tercer y cuarto trimestres», apuntó ayer el que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de Mariano Rajoy, en una charla telemática junto al di-

rector general del MEDE, el alemán Klaus Regling, organizada por la firma Goldman Sachs.

Las palabras de Guindos llegaban un día después de que la Comisión Europea publicara sus previsiones de verano, en las que se señalaba una caída más dura de lo inicialmente estimado, pero a la vez un repunte importante a

partir de ahora. Bruselas coincide en ese análisis con el BCE en que la caída del PIB de la eurozona será de alrededor del 9% y que la recuperación de los niveles pre-crisis no se alcanzará hasta finales de 2022.

«Va tomar tiempo la recuperación», subrayó De Guindos en su intervención de ayer, pero apuntó que «las perspectivas son ahora algo más brillantes de lo que eran hace apenas un par de meses en términos de desempeño económico» y destacó la intervención del banco central y de las

autoridades, tanto nacionales como europeas tras el peor momento, entre marzo y abril. «Creo que ahora la situación es mejor», subrayó el vicepresidente del BCE.

Por otra parte, De Guindos señaló que la consolidación, doméstica y transfronteriza, representa la mejor solución ante la situación por la que atraviesan los bancos, condicionada aun más por la pandemia. Las fusiones deben «avanzar a nivel doméstico entre bancos pequeños y medianos y simultáneamente a nivel transfronterizo», indicó.

El tipo global del Impuesto de Sociedades ha bajado un 25% en veinte años

► España tiene un tipo mayor que la media pero una recaudación menor a la OCDE

J. TAHIRI
MADRID

La globalización y la competición de los países por atraer empresas y capitales se ha traducido en una tendencia a la baja para el Impuesto de Sociedades: en veinte años el tipo ha menguado una cuarta parte del 28% que suponía en 2000 al 20,6% de 2020, según los datos recabados por la OCDE en 119 países o jurisdicciones analizadas. España durante este intervalo de tiempo no fue una excepción: si hace veinte años tenía un tipo del 35% ahora lo tiene del 25%, aún así superior a la media de la OCDE.

Al mismo tiempo, en estos veinte años el impuesto ha elevado su peso en la recaudación mundial: del 2,7% del PIB que suponía en 2000 en 2017 fue del 3,1%. España tuvo una tendencia contraria: pasó de ingresar el 2,9% de 2000 al 2,2% de 2017. Nuestro país ingresa menos pese a tener un tipo mayor por las exenciones, deducciones y bonificaciones del impuesto, que ahora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) está revisando junto a las del resto del sistema tributario.

En estos veinte años se aprobaron rebajas en el impuesto de Sociedades en 88 jurisdicciones, mientras hubo incrementos en 6 y en las 15 restantes no se produjeron cambios. Mientras en 2000 había 13 jurisdicciones con un tipo nominal de Sociedades superior o igual al 40%, veinte años más tarde solo quedaba en ese grupo India (con un 48,3%, lo que incluye un impuesto por la distribución de dividendos).

Junto a estas tendencias, el informe «Estadísticas del Impuesto de Sociedades» incluye un alud de datos recopilados mediante el informe país por país que 4.000 multinacionales entregaron desde 2016: si bien tienen sede en 26 países, sus operaciones se extienden a más de cien países por todo el mundo. De media los tipos efectivos son algo más bajos entre las jurisdicciones analizadas que los nominales en España son similares, del entorno del 19% frente al 25% de tipo teórico.

La OCDE llega a varias conclusiones

India, el país con un impuesto más alto, el 48,3%

India es el país con un tipo en el Impuesto de Sociedades más alto entre los analizados por la OCDE, con un 48,3% sobre los beneficios empresariales. Le sigue Malta y la República Democrática del Congo, ambos con un 35%, además de Brasil, con un 34%, y Namibia, con un 32%. ¿Cuáles son los más bajos? Los paraísos fiscales del Caribe figuran en esta selecta lista de jurisdicciones con un tipo del 0%, con Anguilla, Bahamas, Bermuda, islas Caimán o islas Vírgenes Británicas a lo que se suman otras jurisdicciones excolonias británicas como Jersey, la isla de Man o Guernsey y países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Bahreín.

una vez analizados los datos de este grupo de multinacionales. «Existe un desacople entre donde se declaran los beneficios y el lugar en el que se generan las actividades económicas», recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Innovación y desarrollo

Curiosamente, la mayor parte de los países apoyan más la innovación que en 2006 aunque España es una de las excepciones. Las ayudas tributarias al I+D empresarial están por debajo que la media de otros países, así como la financiación directa, que representa en conjunto una cantidad inferior al 0,1% del PIB, lejos de casi el 0,5% que dedica Rusia o el 0,4% de Francia.

La OCDE también ausculta cómo son los regímenes fiscales de propiedad intelectual. En España en estos marcos el tipo de Sociedades baja del 25% del nominal al 10%, un tipo real que es incluso algo menor en País Vasco y Navarra. En países como Luxemburgo, el tipo llega a ser en estos casos del 5%, mientras que en Irlanda es del 7% y en Hungría o Uruguay, del 0%.



Las gallinas de la granja albaceteña están estresadas y no ponen huevos. **R. C.**

Gallinas estresadas por los cazas

En Albacete. Una granja litiga desde hace años con Defensa y ahora se plantea echar el cierre porque sus aves no ponen huevos

J. V. MUÑOZ-LACUNA

Los propietarios de la granja avícola Cortijo de Cardos, en Villapalacios (Albacete), están a punto de rendirse en una guerra desigual con el Ministerio de Defensa que dura años. Hace dos denunciaron que cerca de 2.000 gallinas habían muerto por el estrés causado por los bajos vuelos de los aviones militares que

tienen en el cielo de la Sierra de Alcaraz su campo de maniobras.

Ahora, y después de que este negocio de avicultura ecológica haya sobrevivido al estado de alarma por la covid-19, sus dueños se plantean cerrar y han vuelto a pedir explicaciones al Ministerio y a la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). Y es que las estresadas gallinas campe-

ras no ponen huevos, las pérdidas económicas son continuas y hay que devolver los créditos solicitados para reflotar la empresa después de dos años con la mitad de la granja cerrada.

«Pedimos que vuelen en otro sitio y, si no, que nos aclaren la situación, porque no nos contestan y el Ejército no nos informa», se queja José Rodríguez,

propietario de la explotación. «Los cazas pasan con vuelos rasantes y hasta se puede ver el color del casco del piloto. Esto parece la Guerra de las Galaxias», añade José, que también ha llegado a pedir el amparo del Defensor del Pueblo, institución que se interesó por el asunto hace un año.

Reserva natural protegida

Cuando los aviones militares sobrevuelan Cortijo de Cardos, el ambiente retumba y los perros y gallinas salen corriendo para esconderse como buenamente pueden, incluso unas encima de otras, lo que provoca que algunas mueran aplastadas. Actualmente, esta granja cuenta con unas 600 gallinas camperas, aunque podría albergar cerca de 2.000. El cierre que la covid-19 no ha logrado, unos cazas pueden precipitarlo «porque la Base de Los Llanos nos ha dejado en la quiebra», aunque José piensa disparar las últimas balas en la batalla y anuncia una demanda penal por los daños y perjuicios sufridos. José Rodríguez asegura que su problema es común a otras explotaciones ganaderas de esta zona, situada en la Reserva Natural de la Sierra de Alcaraz, que también sufren «a los aviones sobrevolando una reserva protegida y de alto valor cinético que ha resurgido en estos meses de aislamiento». El problema, apunta, es que «los huevos ya no eclosionan y si mis mastines se esconden y buscan protección humana cuando vienen los cazas, ¿qué harán otras especies como el lince ibérico?», se pregunta.

Eco-dependencia

«La crisis de identidad impedirá a los ecologistas aprovechar la ola verde que inunda Europa»

JUAN CARLOS VILORIA



En las elecciones municipales francesas del pasado 28 de junio el partido ecologista (Europe Ecologie-Les Verts) ha obtenido un formidable respaldo electoral que le permitirá gobernar hasta un total de veinte ciudades y dos millones de ciudadanos. Es un movimiento ya consolidado en Europa que en las elecciones del año pasado consiguió casi el 14% de los votos colocándose como tercera fuerza superando con claridad al Partido Socialista. Los ecologistas europeos han roto ya el cordón umbilical con la izquierda y se han emancipado del Partido Socialista a cuya sombra han estado décadas. Esa autonomía organizativa e ideológica les ha permitido ofrecerse como alternativa de gobierno. Nada que ver con nuestros verdes ibéricos que vienen arrastrando sus listas ofreciéndose desde Izquierda Unida, luego a Podemos y finalmente a Más País (Errejón). Esa dependencia política de la izquierda radical, sus propias querrelas internas que culminaron con la ruptura de Equo y la salida de su fundador López Uralde, son algunas de las razones de su jibarización como fuerza política. En las elecciones autonómicas vascas y gallegas donde se presentan como Equo su imagen aún está lastrada por la última crisis y un vacío de liderazgo absoluto. Eso les impedirá, con toda probabilidad, aprovechar una coyuntura histórica ideal para haberse hecho un hueco definitivamente en la política nacional. La catástrofe humana y medioambiental del vertedero de Zaldibar en Vizcaya; las grandes movilizaciones de jóvenes que antes pasaban de política sensibilizados con el cambio climático, el desprestigio de las fuerzas políticas tradicionales, incluido Unidas Podemos, que apunta a un hundimiento importante. La propia angustia social por la aparición de la covid-19.

Los ecologistas en Europa están convirtiéndose en voto refugio de los desencantados de la política tradicional y de los afectados por el catastrofismo ambiental. Pero nuestros Verdes están atrapados por la maquinaria de la izquierda y sus minúsculas luchas de poder. Eso ya les impidió presentar candidatura a las elecciones europeas confirmando que ese hueco verde en España todavía no tiene dueño. Para desconcertar aun más a su posible clientela que no tiene por qué provenir de la izquierda, sus programas hacen sobre todo hincapié en cuestiones sociales, feministas, RGI, inmigración etc, alejadas del estricto medioambiente. La tendencia que está teniendo éxito en Europa pasa por apostar por un voto joven, transversal, ideológico ni obligadamente de izquierda sino realista y profesional. Una vez más dejarán pasar la ola verde.